

Agua, agricultura y desarrollo en Portugal
Notas para una reflexión común por iniciativa de la red «REDAMED»*

João Castro Caldas
Instituto Superior de Agronomía
Universidade Técnica de Lisboa

Las diversas estimaciones sobre los recursos hídricos potenciales medios, relativas al territorio portugués, arrojan valores bastante favorables en comparación con los de otros países europeos. Con todo, la situación portuguesa no carece de especificidad con respecto a esos mismos países. En efecto, además de ser un país de aguas abajo en lo que respecta a una parte significativa de sus cursos superficiales, Portugal está sujeto a fluctuaciones anuales e interanuales muy marcadas de las precipitaciones y del caudal de los cursos de agua. Pese a todo, considerándola globalmente, y aún teniendo en cuenta sólo los recursos generados en Portugal, la situación continúa siendo relativamente favorable. Como se reconoce en el Plan Nacional para el Uso Eficiente del Agua de 2005, «aunque a escala nacional y anual Portugal no tenga grandes problemas de escasez de agua en situación hídrica normal, pueden presentarse situaciones críticas de sequía, estacionales o localizadas. Estas situaciones pueden ser de carácter cuantitativo, resultantes, por ejemplo, de períodos de mayor escasez hídrica, o de carácter cualitativo, con reducción de las disponibilidades de agua con la necesaria calidad, resultante, por ejemplo, de accidentes de contaminación».

No obstante la relativa abundancia de recursos, el panorama global esconde la desigual repartición en el territorio y las acentuadas fluctuaciones anuales e interanuales. En efecto, el territorio de Portugal está marcado por el acusado contraste entre el Norte montañoso y las grandes llanuras del Sur. De este contraste resultan bruscas variaciones climáticas, distintas de las que produciría por sí sola la diferencia de latitud. Son estos factores, combinados con los efectos esperados de las alteraciones climáticas previsibles, los que determinan la necesidad de una cuidadosa política de gestión de potencialidades y disponibilidades, condicionante de estrategias individuales y colectivas para un aprovechamiento, control y distribución razonables de los recursos.

Agua y agricultura. El nuevo marco de referencia

Aumentar las disponibilidades de agua para riego ha representado un elemento decisivo del aprovechamiento de las potencialidades para la corrección de las restricciones naturales, permitiendo ganancias en productividad y diversificación de las producciones. Desde esta perspectiva, los proyectos hidroagrícolas fueron adquiriendo en un pasado reciente un lugar central como vectores privilegiados de múltiples programas y propuestas para el desarrollo, siendo asumido el regadío como algo intrínsecamente bueno, digno de ser fomentado por los poderes públicos a cualquier precio (cf. López Gálvez y Naredo, 1997).

A medida que han ido aumentando los problemas de penuria y de degradación de recursos, fue cambiando la atmósfera que marcó la fase expansionista del regadío, que Naredo (1997) designó como fase del «paternalismo intervencionista» del Estado. La competencia interregional e intersectorial potencia conflictos con fuerte impacto en una opinión pública sensibilizada ante las cuestiones ambientales, y los responsables de decidir comienzan a ver en la agricultura una válvula de escape del sistema. Los presupuestos de las políticas de fomento hidroagrícola como algo bueno a cualquier precio comienzan a convertirse en herejía económica.

* Traducido del portugués por Arón Cohen. La versión original en portugués figura detrás de esta traducción.

En esta nueva atmósfera, se reconoce que, contrariamente a lo previsto en la fase de concepción de muchos proyectos hidroagrícolas de gran dimensión, los objetivos que se proponían no se alcanzaron mecánicamente con la mera introducción del riego. Se apuntan ahora faltas de eficiencia en la utilización del agua por parte de la mayoría de las comunidades de regantes y se discuten los impactos de prácticas inadecuadas de la agricultura de regadío en la calidad de las aguas y en la degradación de los suelos, subrayándose la necesidad apremiante de rehabilitar, modernizar y mejorar los sistemas de riego, incluyendo entre sus objetivos la conservación de los recursos y la calidad ambiental.

Por otro lado, la creciente pérdida de peso de la agricultura en el sistema económico ha conducido a que se suscite igualmente la cuestión de saber si consumos del orden del 87% de los recursos disponibles, como los señalados por el Plan Nacional del Agua, se justifican ante los modestos porcentajes con los que la agricultura contribuye al Producto Interior y al empleo. La cuestión del precio a pagar por el agua de riego se erige así, también, en objeto de debate, contestándose que el Estado continúe siendo abastecedor de agua gratuita para usos poco eficientes. La agricultura aparece como un sector aparte sin razones económicas que lo justifiquen y se generaliza la idea de que los regantes dilapidan agua por el hecho de tenerla disponible sin pagar nada o pagando muy poco. Las disparidades de precios entre sectores son tan grandes que parece que no se tratase de agua procedente del mismo ciclo hidrológico. En Portugal pueden encontrarse situaciones en las que el agua no tratada se suministra a los diferentes sectores, a la salida de la misma infraestructura de almacenamiento, con una relación de precios unitarios entre consumos agrícolas, urbanos e industriales de 1:2:4, respectivamente (cf. Caldas, 1997).

En lo que respecta a la cuestión del pago por el agua, la oposición pasa entre, de un lado, una concepción del agua como mercancía o factor de producción, y de otro, una concepción del agua como «activo eco-social», en la que se intenta abarcar su carácter multidimensional, económico, social y ambiental. En el caso portugués, la Ley del Agua (Ley 58/2005), que transpone al orden jurídico nacional la Directiva Marco del Agua de 2000, donde se establecen las bases y el marco institucional para la gestión sostenible de las aguas, instituye el «principio del valor económico del agua, en virtud del cual se consagra el reconocimiento de la escasez actual o potencial de este recurso y la necesidad de garantizar su utilización económicamente eficiente, con la recuperación de los costes de los servicios de aguas, inclusive en términos ambientales y de recurso, y tomando como base los principios del contaminador-pagador y del utilizador-pagador» (apartado c del artículo 3º).

En un contexto en el que la idea liberal del «Estado mínimo» se afirma como ideología dominante, asistimos a una apelación a la contención del gasto público y al desplazamiento de las opiniones desde el «paternalismo intervencionista» a la «desregulación privatizadora». El agua, ya sea para riego o para otros usos, aparece como un negocio potencialmente atractivo para el sector privado. De este modo, dejan de incumbir al Estado las voluminosas inversiones y la tutela sobre la gestión técnica de las obras hidráulicas.

En el caso de las grandes infraestructuras hidroagrícolas de Portugal, la solución ha pasado por su entrega a entidades encargadas de asegurar la gestión, explotación y conservación de los sistemas. Estas entidades son asociaciones de las que los beneficiarios no necesariamente forman parte, debiendo simplemente someterse, como meros consumidores del factor de producción agua, a las decisiones empresariales, cuyo objetivo a menudo no es otro que vender las mayores cantidades posibles de agua, al margen de cualquier preocupación por su uso eficiente.

Al Estado pasa a competerle la defensa de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, así como de los ecosistemas a ellas vinculados, es decir la defensa de las dimensiones sociales y ambientales del agua, que se reconocen como difícilmente regulables por el mercado.

Agua y desarrollo en espacios rurales post-agrícolas

En Portugal, los mayores proyectos hidroagrícolas de iniciativa estatal se localizaron en los campos del Sur, en áreas caracterizadas por la gran concentración de la propiedad de la tierra y condicionadas por la fuerte irregularidad anual e interanual de los recursos hídricos, con frecuentes períodos de gran escasez de agua. Estos proyectos estaban encaminados a la extensión del regadío a zonas tradicionales de secano y su concreción vino a producirse a partir de los años cuarenta del siglo XX, en el marco del Plan de Riego del Alentejo, que preveía la irrigación de cerca de 173.000 ha (cf. Baptista, 1993, 2002). Las construcciones, parte de las cuales fueron concebidas en la perspectiva de su integración futura en los circuitos hidráulicos alimentados por un gran proyecto que fue ideado en la segunda mitad de los años cincuenta (Alqueva), acabaron beneficiando un área que, a finales de siglo, rondaba las 50.000 ha.

En la mayor parte de estas obras, las abultadas inversiones públicas acabaron redundando en beneficio de colectivos de usuarios vinculados a la gran propiedad de la tierra. No se tocó la estructura de la propiedad y a lo largo de los años de funcionamiento de estas infraestructuras los intereses terratenientes en las áreas afectadas han primado continuamente sobre la búsqueda de vías para el adecuado uso de agua y suelo. En la mayor parte de los casos, las transformaciones programadas en los sistemas de producción, que sirvieron de justificación a la inversión pública, no se concretaron por falta de inversiones privadas (cf. Baptista, 1993, 2002). Así, las superficies efectivamente regadas quedaron siempre muy por debajo de las beneficiadas.

Como se refirió más arriba, el proyecto hidráulico con objetivos múltiples del Alqueva fue concebido en la segunda mitad de los años cincuenta del siglo pasado, en el ámbito del plan de riego del Alentejo. Además de su componente decisiva de proveer agua para el riego, también tenía como objetivos expresos la constitución de una gran reserva estratégica de agua, la contribución a la regularización del río Guadiana, la provisión de agua para el abastecimiento público y a la industria, el combate contra la desertificación, la producción de energía eléctrica y la contribución al desarrollo del turismo.

Con su realización permanentemente aplazada, este proyecto constituyó durante décadas una fuente de polémica en el debate sobre el desarrollo de los campos del Sur.

Las obras fueron retomadas en 1995, con la coparticipación de fondos comunitarios, y las compuertas se cerraron el 8 de febrero de 2002. Los trabajos dieron lugar a un lago artificial de 250 km² de superficie, 83 km de largo y cerca de 1.100 km de orillas. Con una capacidad total de almacenamiento de 4.150 km³, está previsto que promueva más de 110.000 ha de nuevos regadíos, con un sistema compuesto por una red de canales y conducciones que alcanzará los 5.000 km.

A raíz de la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea en 1986 y de las reformas de la Política Agrícola Común, las ayudas e incentivos se adecuaron a la práctica y la lógica rentistas de la propiedad de la tierra, desincentivando las actitudes de aquellos detentores que justifican inversiones públicas en el regadío para el fomento de la producción y el empleo. Como subraya Baptista (2002), el camino emprendido conduce a un panorama que puede tender a «un capitalismo salvaje promovido por los propios grandes propietarios o instalado por los grupos a los que, con notables beneficios, éstos están vendiendo sus tierras en las zonas que deberá regar el Alqueva»¹.

En un contexto de absoluto dominio de la gran propiedad en los campos del Sur, que condiciona las soluciones para la producción y el empleo de la vertiente hidroagrícola del proyecto, ésta última está perdiendo peso frente a las restantes, así en la esfera de la opinión

¹ Cf. el diario portugués *Público* del 9 de julio de 2006: «un cuarto del regadío del Alqueva es ya para el olivar español: en apenas tres años, empresarios del país vecino revolucionarán la agricultura alentejana, invirtiendo más de 350 millones de euros en la adquisición de tierras y en la aplicación del nuevo modelo agrícola basado en la olivicultura».

pública como en la de las oportunidades de negocios. Existen, en efecto, fuertes indicios de abultadas transacciones de tierras para usos no agrícolas, que están disparando los precios² y confirmando ya «notables beneficios» del proyecto para el grupo de los terratenientes.

Actualmente hay creadas grandes expectativas en torno a las oportunidades de negocio en el sector del turismo. En efecto, la revisión del plan de ordenación de los embalses de Alqueva y Pedrogão de marzo de 2006 (POAAP) presenta como oportunidad dentro del capítulo de *actividades económicas* una «fuerte motivación hacia importantes inversiones en la región de Alqueva, principalmente en el sector turístico» y apunta como amenaza la «posible dificultad para controlar el crecimiento y la especulación en torno a la actividad turística». En el capítulo de las especificidades del área de intervención, el referido documento de revisión del POAAP alerta sobre el condicionamiento de la utilización del embalse «en lo que respecta a sus usos y funciones potenciales, especialmente sobre las actividades secundarias a desarrollar», recalcando que la oscilación del nivel de agua del embalse provoca «alteraciones de la morfología de márgenes e islas, que unas veces serán efectivamente islas y otras penínsulas». Subrayando que la oscilación máxima del nivel del embalse dará lugar a una «faja interniveles» que puede llegar a alcanzar valores del orden de los 2.000 m, este documento sostiene que estaremos «ante un paisaje en transformación sucesiva, cuyo carácter e identidad variarán a lo largo del tiempo de manera acusada: al impresionante e “infinito” plano de agua podrá suceder una imagen de aridez, vertientes desnudas e irregulares y a veces cenagosas, donde en determinadas situaciones no se vislumbrará el agua».

Hasta el momento hay anunciadas intenciones de construir 11 grandes unidades turísticas con un total de 22.500 camas, que se presentan como garantía de la viabilidad del proyecto³. No es descabellado admitir que los intereses envueltos en estos grandes proyectos turísticos intenten condicionar el consumo de agua de los otros sectores usuarios para minimizar el efecto de la oscilación del nivel de agua. También importa subrayar, con respecto al impacto de los grandes proyectos turísticos en el ámbito regional, que «las economías de escala, aglomeración e integración condicionan la competitividad y la sostenibilidad económica y social, incluso en segmentos de excelencia dirigidos a clientelas de elevado poder adquisitivo; y los volúmenes de las inversiones en juego tienden por sí solos a excluir como actores a los empresarios locales» (Cavaco, 2003: 37).

El proyecto del Alqueva anunciaba tiempos de seguridad ante la posibilidad de controlar los caudales y de reservas de agua a través del progreso técnico. Hizo concebir a muchos una superación de los tiempos de fragilidad ante los dones de la naturaleza o de poderosas divinidades, abriendo puertas y oportunidades de desarrollo. Cincuenta años después, es legítimo el temor a tiempos de perplejidad ante crisis resultantes de una explotación que conduce a la penuria, al reparto desigual y a la degradación de los recursos.

Referencias

- Baptista, F. O. (1993), *A política agrária do Estado Novo*. Afrontamento, Oporto.
Baptista, F. O. (2002), «Alqueva, o regadio e o Alentejo». *Reflexão cristã* 18/19: 51-59.

² Cf. *Expresso* del 24 de junio de 2006: «Los precios de los terrenos se disparan [en la zona del Alqueva]: cuando se altera el uso del suelo y éste pasa de rural a urbano, los terrenos pueden revalorizarse hasta en un 10 mil por ciento».

³ El administrador delegado de Gestalqueva S. A. «cree que estos proyectos “pueden garantizar la viabilidad de los trabajos, si se hacen con rigor” (...); esta decisión representa una alteración muy significativa de la política de ordenación prevista en 2002 para el Alqueva (...) [que] limitaba a seis el número de unidades turísticas autorizadas en el área situada en un entorno de 500 m contados desde el Nivel de Pleno Almacenamiento (NPA) del embalse, con una capacidad conjunta de 480 camas como máximo». Cf. *Público Local Lisboa* del 6 de junio de 2006.

- Caldas, J. C. (1995), «O empreendimento de Alqueva e a opinião pública», in *Actas do VII Congresso Sobre o Alentejo* (2º vol.): 125-132.
- Caldas, J. C. (2001), «Benefícios sociais dos projectos hidroagrícolas», in *Agricultura, economia e sociedade. Ensaio em homenagem ao Professor Fernando Estácio*. IFADAP, Lisboa: 161-167.
- Caldas, J. C. (2006), «Água e desenvolvimento. Os territórios de Alqueva», in Maria Lucinda Fonseca (coord.): *Desenvolvimento e território: espaços rurais pós agrícolas e novos lugares de turismo e lazer*, Lisboa, CEG, pp. 153-167.
- Cavaco, C. (2003), «Permanências e mudanças nas práticas e nos espaços turísticos», in O. Simões y A. Cristovão (org.): *TERN. Turismo em espaços rurais e naturais*, Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra: 25-38.
- López Gálvez, J. y Naredo, J. (1997), «Gestión del agua de riego: problemas y propuestas», in J. López Gálvez y J. Naredo (ed.): *La gestión del agua de riego*. Argentario, Madrid: 11-30.
- Naredo, J. (1997), «Enfoques económicos y ecológicos en la encrucijada actual de la gestión del agua en España», in P. Arrojo y J. Naredo (ed.): *La gestión del agua en España y California*. Bakeaz, Bilbao: 151-185.

Água, agricultura e desenvolvimento em Portugal
Notas para uma reflexão comum por iniciativa da rede “REDAMED”
João Castro Caldas
Instituto Superior de Agronomia
Universidade Técnica de Lisboa

As diversas estimativas sobre os recursos hídricos potenciais médios, relativas ao território português, apontam para valores bastante favoráveis quando comparados com outros países europeus. A situação portuguesa não deixa contudo de ter a sua especificidade relativamente a outros desses mesmos países. De facto, Portugal, além de ser um país de jusante no que respeita a parte significativa do escoamento superficial, está anual e inter-anualmente sujeito a flutuações de precipitação e de escoamento muito marcadas. Contudo, numa apreciação global, mesmo contando apenas com os recursos gerados em Portugal a situação continua a ser relativamente favorável. Como se reconhece no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água de 2005, “embora à escala nacional e anual Portugal não tenha grandes problemas de escassez de água em situação hídrica normal, podem no entanto ocorrer situações críticas de seca, sazonais ou localizadas. Estas situações podem ser de carácter quantitativo, resultantes por exemplo de períodos de maior escassez hídrica, ou de carácter qualitativo, com redução das disponibilidades de água com a qualidade necessária, resultante por exemplo de acidentes de poluição.”

Apesar da relativa abundância de recursos, o panorama global esconde uma desigual repartição no território e as acentuadas flutuações anuais e inter anuais. O território de Portugal é, com efeito, marcado pelo vincado contraste entre o Norte montanhoso e as grandes planícies do Sul. Deste contraste resultam modificações de clima bruscas e diferentes das que resultariam apenas da diferença de latitude. São estes factores, conjugados com os efeitos esperados de previsíveis alterações climáticas, que determinam a necessidade de uma cuidada política de gestão de potencialidades e de disponibilidades, condicionante de estratégias individuais e colectivas para um criterioso aproveitamento, controle e distribuição dos recursos.

Água e agricultura. O novo quadro de referência

Tornar disponível água para rega tem representado um elemento decisivo de aproveitamento de potencialidades para correcção de restrições naturais, permitindo ganhos de produtividade e diversificação de produções. Num passado recente, os projectos hidroagrícolas foram, nesta perspectiva, ganhando um lugar central como vectores privilegiados de múltiplos programas e propostas para o desenvolvimento, sendo o regadio assumido como algo intrinsecamente bom, digno de ser fomentado pelos poderes públicos a qualquer preço (cf. López-Gávez e Naredo, 1997).

À medida que aumentam os problemas de penúria, e de degradação de recursos, vai-se alterando o ambiente que marcou a fase expansionista do regadio, que Naredo (1997) designou como fase do “paternalismo intervencionista” do Estado. A concorrência inter-regional e inter-sectorial potencia conflitos com forte impacte numa opinião pública despertada para as questões ambientais e os decisores começam a encarar a agricultura como a válvula de escape do sistema. Os pressupostos das políticas de fomento hidroagrícola como algo de bom a qualquer preço começam a transformar-se em heresia económica.

Neste novo ambiente, reconhece-se que, ao contrário do previsto na fase de concepção de muitos projectos hidroagrícolas de grande dimensão, os objectivos propostos não foram atingidos de forma mecânica apenas com introdução da rega. Apontam-se agora faltas de

eficiência na utilização da água por parte da maioria das comunidades de regantes e discutem-se os impactes de inadequadas práticas da agricultura regada na qualidade das águas e na degradação dos solos, sublinhando-se a necessidade premente de reabilitar, modernizar e melhorar os sistemas de rega, incluindo nos seus objectivos a conservação dos recursos e a qualidade ambiental.

Por outro lado, a crescente perda de peso da agricultura no sistema económico tem levado a que se levante ainda a questão de saber se consumos na ordem dos 87% de recursos disponíveis, como os apontados no Plano Nacional da Água, se justificam face aos modestos pontos percentuais com que a agricultura contribui para o Produto Interno e para a ocupação da população activa. A questão do preço a pagar pela água de rega surge assim também a debate, contestando-se que o Estado continue a ser fornecedor de água gratuita para usos pouco eficientes. A agricultura aparece como um sector à parte sem razões económicas que o justifiquem e generaliza-se a ideia de que os regantes delapidam água pelo facto de a terem disponível não pagando nada, ou pagando quase nada. As disparidades de preços entre sectores são tão grandes que nem parece vir a água do mesmo ciclo hidrológico. Em Portugal podem encontrar-se situações em que a água não tratada é fornecida aos diferentes sectores, à saída da mesma infra estrutura de armazenamento, com uma relação de preços unitários entre consumos agrícolas, urbanos e industriais de 1:2:4, respectivamente (cf. Caldas, 1997).

No que diz respeito à questão do pagamento da água, o que está em confronto é uma concepção da água como mercadoria ou factor de produção *versus* uma concepção da água como “activo eco-social”, em que se procura abarcar o seu carácter multidimensional de nível económico, social e ambiental. No caso português, a Lei da água (Lei nº 58/2005), que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva Quadro da Água de 2000 onde se estabelecem as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, institui o “princípio do valor económico da água, por força do qual se consagra o reconhecimento da escassez actual ou potencial deste recurso e a necessidade de garantir a sua utilização economicamente eficiente, com a recuperação dos custos dos serviços de águas, mesmo em termos ambientais e de recurso, e tendo por base os princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador” (alínea c do artigo 3º).

Num ambiente em que a ideia liberal de “Estado mínimo” se afirma como ideologia dominante, assiste-se a um apelo para a contenção de despesas públicas e ao deslocar das opiniões do “paternalismo intervencionista” para a “desregulação privatizadora”. A água, para rega, como para outras utilizações, aparece como um negócio potencialmente atractivo para o sector privado. Deixam, assim, de caber ao Estado os vultuosos investimentos e a tutela sobre a gestão técnica dos empreendimentos hidráulicos.

No caso dos grandes empreendimentos hidroagrícolas em Portugal, a solução tem passado pela entrega dos empreendimentos a entidades com funções de assegurar a gestão, exploração e conservação dos sistemas. Estas entidades são associações de que os beneficiários não são obrigatoriamente associados, devendo apenas submeter-se, como meros consumidores do factor de produção água, a decisões empresariais, tomadas muitas vezes com o objectivo de vender as maiores quantidades possíveis de água, independentemente da preocupação pelo seu uso eficiente.

Ao Estado passa a competir a defesa da qualidade de águas superficiais e subterrâneas e dos ecossistemas a elas vinculados, ou seja, a defesa de dimensões sociais e ambientais da água, que se reconhecem como dificilmente reguláveis pelo mercado.

Água e desenvolvimento em espaços rurais pós agrícolas

Em Portugal, os empreendimentos hidroagrícolas de iniciativa estatal de maior dimensão vieram a localizar-se nos campos do Sul, em áreas caracterizadas pela grande concentração da propriedade fundiária e condicionadas por forte irregularidade anual e inter-anual de recursos hídricos com frequentes períodos de grande escassez de água. Estes empreendimentos visaram o alargamento do regadio a zonas tradicionais de sequeiro e a sua concretização veio a verificar-se a partir dos anos quarenta do século XX, no quadro do Plano de Rega do Alentejo, onde se previa a rega de cerca de 173 mil ha (cf. Baptista, 1993, 2002). As obras construídas, algumas das quais implantadas na perspectiva de futura integração nos circuitos hidráulicos alimentados por um grande empreendimento idealizado, na segunda metade dos anos cinquenta (Alqueva), acabaram por beneficiar, até finais do século, uma área que rondou os 50 mil ha.

Na maior parte destes empreendimentos os avultados investimentos públicos acabaram por resultar em benefício de colectivos de utilizadores vinculados à grande propriedade fundiária. Não se tocou na estrutura da propriedade e ao longo dos anos em que os empreendimentos têm estado em funcionamento os interesses da propriedade fundiária nas áreas beneficiadas tem-se continuamente sobreposto à procura de vias para o uso adequado da água e do solo. As mudanças programadas ao nível dos sistemas de produção, que serviram de justificação ao investimento público, não foram, na maior parte dos casos, concretizadas por falta de investimentos privados (cf. Baptista, 1993, 2002). As áreas efectivamente regadas ficaram, assim, sempre muito aquém das beneficiadas.

O empreendimento hidráulico de fins múltiplos de Alqueva foi, como acima se referiu, idealizado na segunda metade dos anos cinquenta do século passado, no âmbito do plano de rega do Alentejo. Para além da decisiva componente de fornecimento de água para rega teve também como objectivos expressos, a constituição de uma reserva estratégica de água, a contribuição para a regularização do rio Guadiana, o fornecimento de água para o abastecimento público e da indústria, o combate à desertificação, a produção de energia eléctrica e a contribuição para o desenvolvimento do turismo.

Com a concretização permanentemente adiada, este empreendimento ocupou décadas como pólo potenciador de polémica no debate sobre o desenvolvimento dos campos do Sul.

As obras foram retomadas em 1995, com a comparticipação de fundos comunitários, e as comportas encerradas a 8 de Fevereiro de 2002. O empreendimento deu lugar a um lago artificial com 250 km² de superfície, 83 km de comprimento e cerca de 1100 km de margens. Com capacidade que permite armazenar um volume total de 4150 hm³, irá, segundo o previsto, promover mais 110 mil ha de novos regadios, com um sistema composto por uma rede de canais e condutas que virá a atingir os 5 mil km.

Depois da adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986 e das reformas da Política Agrícola Comum, as ajudas e incentivos adequaram-se à prática e lógica rentistas da propriedade fundiária e desincentivaram atitudes dos detentores da terra que justificam investimentos públicos no regadio para promoção da produção e do emprego. Como sublinha Baptista (2002), o caminho que se tem vindo a desenhar conduz a um panorama que pode pender para “um capitalismo selvagem promovido pelos próprios grandes proprietários ou

instalado pelos grupos a que estes já estão a vender, com expressão e benefícios assinaláveis, as suas terras nas áreas a beneficiar por Alqueva”⁴.

Num contexto de domínio absoluto da grande propriedade nos campos do Sul a condicionar soluções para a produção e o emprego da vertente hidroagrícola do empreendimento, esta tem vindo a perder peso face às restantes, tanto ao nível da opinião pública como das oportunidades de negócios. Existem, assim, fortes indícios de avultadas transacções de terra para usos não agrícolas, fazendo disparar os preços⁵ e confirmando desde já “benefícios assinaláveis” do empreendimento, para o grupo dos proprietários fundiários.

Grandes expectativas estão agora criadas em torno das oportunidades de negócio no sector do turismo. De facto, a revisão do plano de ordenamento das albufeiras de Alqueva e Pedrógão de Março de 2006 (POAAP), apresenta como oportunidade da componente *actividades económicas* uma “forte motivação para fortes investimentos na Região do Alqueva, principalmente no sector turístico” e aponta como ameaça a “possível dificuldade em controlar o crescimento e especulação em torno da actividade turística”. No capítulo das especificidades da área de intervenção o referido documento de revisão do POAAP alerta para o condicionamento da utilização da albufeira “em termos de usos e funções potenciais, em especial das actividades secundárias a desenvolver”, sublinhando que a oscilação do nível da água na albufeira provoca “alterações das formas morfológicas das margens e das ilhas, que por vezes serão ilhas noutras penínsulas”. Sublinhando que a oscilação máxima do nível da albufeira dá lugar a uma “faixa interníveis” que pode alcançar valores na ordem dos 2000 m, acrescenta-se, neste documento, que se virá a estar “perante uma paisagem em mutação sucessiva, onde o seu carácter e a sua identidade variaram ao longo do tempo de uma forma acentuada: do impressionante e ‘infinito’ plano de água, poderá suceder-se-lhe uma imagem de aridez, encostas nuas e irregulares, por vezes lamacentas, onde a água em determinadas situações nem se deslumbra”

Até ao momento estão anunciadas intenções de construir 11 grandes unidades turísticas que, somando 22500 camas, são apresentados garante da viabilidade do empreendimento⁶. Não é abusivo admitir que os interesses envolvidos nestes grandes empreendimentos turísticos, tentem condicionar o consumo de água dos restantes sectores de utilização no sentido de minimizarem o efeito da oscilação do nível da água. Importa sublinhar ainda, relativamente ao impacto de grandes empreendimentos turísticos a nível regional, que “as economias de escala, de aglomeração e de integração condicionam a competitividade e a sustentabilidade económica e social, mesmo nos segmentos de excelência dirigidos a clientelas de elevado poder aquisitivo; e os volumes dos investimentos em jogo tendem por si só a excluir, como actores, os empresários locais” (Cavaco, 2003:37) O empreendimento idealizado trouxe momentos de segurança face à possibilidade do controle de caudais e de reservas de água através do progresso técnico. Fez adivinhar, em muitos, o

⁴cf. *Público* de 9 de Julho de 2006: “Um quarto de regadio de Alqueva já é para olival espanhol: em apenas três anos, empresários do país vizinho revolucionaram a agricultura alentejana, investindo mais de 350 milhões de euros na aquisição de terras e na aplicação do novo modelo agrícola baseado na olivicultura”

⁵ cf. *Expresso* de 24 de Junho de 2006: “Preços de terrenos disparam [na zona de Alqueva]: quando se altera o uso do solo e este passa de rural para o urbano, os terrenos podem valorizar-se até 10 mil por cento”.

⁶ O administrador delegado da Gestalqueva S.A. “acredita que estes projectos ‘podem garantir a viabilidade do empreendimento, se forem feitos com rigor’ (...) esta decisão representa uma alteração muito significativa na política de ordenamento prevista, em 2002, para Alqueva (...) [que] impunha para a área envolvente dos 500m a contar do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) da albufeira, apenas seis unidades turísticas que, no seu conjunto ofereciam uma capacidade máxima de 480 camas” cf. *Público Local Lisboa* de 6 de Junho de 2006.

ultrapassar dos momentos de fragilidade perante os dons da natureza ou de divindades poderosas, abrindo portas e oportunidades de desenvolvimento. Cinquenta anos depois, é legítimo o temor por momentos de perplexidade perante crises resultantes da exploração que conduz à penúria, à partilha desigual e à degradação dos recursos.

Referências

- Baptista, F. O. (1993) – *A política agrária do Estado Novo*. Afrontamento, Porto.
- Baptista, F. O. (2002) – Alqueva, o regadio e o Alentejo. *Reflexão cristã* 18/19: 51-59.
- Caldas, J. C. (1995) – O empreendimento de Alqueva e a opinião pública. in *Actas do VII Congresso Sobre o Alentejo* (2º volume): 125-132.
- Caldas, J. C. (2001) – Benefícios sociais dos projectos hidroagrícolas. in *Agricultura, economia e sociedade. Ensaio em homenagem ao Professor Fernando Estácio*. IFADAP, Lisboa: 161-167.
- Caldas, J. C. (2006), “Água e desenvolvimento. Os territórios de Alqueva” in Maria Lucinda Fonseca (coord) *Desenvolvimento e território: espaços rurais pós agrícolas e novos lugares de turismo e lazer*, Lisboa, CEG, pp. 153-167
- Cavaco, C. (2003) – Permanências e mudanças nas práticas e nos espaços turísticos. in O. Simões e A. Cristovão (org.). *TERN. Turismo em espaços rurais e naturais*. Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra: 25-38.
- López-Gávez, J. e Naredo, J. (1997) – Gestión del agua de riego: problemas y propuestas. in J. Lopez-Gavez e J. Naredo (ed.). *La gestión del agua de riego*. Argenteria, Madrid: 11-30.
- Naredo, J. (1997) – Enfoques económicos y ecológicos en la encrucijada actual de la gestión del agua en España. in P. Arrojo e J. Naredo (ed.). *La gestión del agua en España y California*. Bakeaz, Bilbao: 151-185.